

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

SENTENCIA

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: HELDA MARÍA MURILLO RINCÓN
Demandados	: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
Litisconsorte	: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
Necesario por Pasiva	: PÚBLICO, E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS
Radicado	: 050013105 022 2018 00148 01
Providencia	: Sentencia
Temas	: Seguridad Social – garantía de pensión mínima de vejez, intereses moratorios -
Decisión	: Confirma Sentencia condenatoria
Sentencia No	: 292

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita se condene al reconocimiento y pago de la **garantía de pensión mínima de vejez**, a partir del 2 de julio del año 2013 o desde el 30 de junio de 2017, **intereses moratorios** o indexación, condenas ultra y extra petita, costas procesales.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que la demandante nació el día 2 de julio de 1956 y cumplió 57 años de edad el mismo día y mes del año 2013; cuenta con 1.020 semanas cotizadas según historia laboral emitida por PORVENIR S.A., más 161.71 semanas por servicios prestados a la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de San Carlos, desde el día 8 de junio de 1993, alcanzando **1.181,71 semanas** en total. El día 25 de octubre de 2017 reclamó el reconocimiento de la pensión de vejez anexando la documentación exigida, sin que transcurridos los cuatro (4) meses otorgados en la Ley 797 de 2003, recibiera respuesta alguna, habiendo lugar al pago de intereses moratorios.

Respuesta a la demanda:

PORVENIR S.A. a través de apoderada judicial, expuso que lo afirmado en la demanda no es cierto o no le consta, afirmando que la demandante no ha diligenciado ante la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), solicitud pensional con los documentos que acrediten su derecho, ni ha autorizado la historia laboral, para verificar si es beneficiaria de un Bono

pensional y si reúne los requisitos para una pensión de vejez normal o en garantía de pensión mínima. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas y propuso en su defensa las excepciones denominadas inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción, hecho exclusivo de un tercero, responsabilidad exclusiva del emisor del Bono Pensional, genérica.

Mediante Auto del 4 de noviembre de 2020, **el Juzgado dio por no contestada la demanda por parte del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y de la E.S.E. SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA.**

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Veintidós Laboral** del Circuito de Medellín, mediante Sentencia del 26 de octubre de 2021, **declaró que a la demandante le asiste el derecho a la pensión de vejez en la modalidad de garantía de pensión mínima**, desde el 2 de agosto de 2017, con 13 mesadas al año; condenó a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar la suma de **\$44.911.538 por concepto de retroactivo pensional**, liquidado **entre el 2 de agosto de 2017 y el 30 de septiembre de 2021; continuar reconociendo la mesada pensional a partir del 1º de octubre de 2021**, en cuantía **equivalente al salario mínimo legal mensual vigente**, sin perjuicio de la mesada adicional de diciembre y los incrementos de Ley; autorizó descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud; ordenó y requirió a PORVENIR S.A. para realizar las gestiones tendientes a lograr los recursos para el

pago de la prestación. Condenó al pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, con cargo a sus propios recursos, desde el 20 de marzo de 2018 hasta la fecha del pago efectivo de la obligación. Declaró probada la excepción de ausencia de responsabilidad en relación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl del Municipio de San Carlos; condenó en Costas a PORVENIR S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$3.368.365 a favor de la demandante.

Recurso de Apelación apoderado de PORVENIR S.A.:

Sostiene que la demandante solo presentó un derecho de petición enviando algunos documentos, incumpliendo obligaciones inherentes como afiliada, tales como las cargas del Decreto 1748 de 1995 artículo 52 inciso 2º, pues se debía establecer la historia laboral, solicitarse las certificaciones de tiempos de servicio con el salario base, tenía que verificar la información y solicitar las modificaciones en caso de encontrar inconsistencias, una vez se establece que la historia laboral está correcta se procede a solicitar la emisión de Bono pensional, lo que no se dio porque la demandante en ningún momento reclamó y no firmó la historia laboral. Respecto a que se tiene un término para reconocer la pensión es cierto, siempre y cuando el afiliado haya entregado la documentación necesaria. Está en desacuerdo con que la demandante cumple la densidad de 1.150 semanas cotizadas, ya aparece con 1.092 semanas confirmadas y 41 por confirmar, lo que daría un total de 1.133.5 semanas, insuficientes para el reconocimiento pensional. Expone que no existe Bono pensional emitido por el Hospital de San Carlos, entidad que no

cumplió con esa obligación y por tanto, esas semanas no pueden ser asumidas por la AFP, Bono que no ha sido solicitado, emitido y pagado, por una situación no atribuible a la AFP, únicamente a la demandante por no haber presentado la reclamación y suscribir la historia laboral en su liquidación provisional, sin estos recursos no se podrían computar esas semanas para alcanzar las 1.150 exigidas; debiendo prosperar la excepción de petición antes de tiempo. Agrega que no hay lugar a la imposición de intereses moratorios, ya que al no presentarse la reclamación con los documentos idóneos y no existir el Bono pensional, no se entiende de dónde se saca la fecha 20 de marzo de 2018 para hablar de un incumplimiento; en caso de aceptarse que el derecho de petición enviado a PORVENIR S.A. cumple con los requisitos de una reclamación, la AFP adelantó todas las gestiones y solo se cuenta con 1.092 semanas, insuficientes para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima.

Alegatos de conclusión:

Los apoderados de la demandante y PORVENIR S.A., reiteraron argumentos expuestos en el trámite de primera instancia y al sustentar el recurso de apelación.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.

Conflicto jurídico:

El asunto a dirimir, radica en verificar si hay lugar a revocar la Sentencia de Primera Instancia, analizándose si PORVENIR S.A. está obligada a reconocer y pagar a favor de la demandante la garantía de pensión mínima de vejez; en caso afirmativo, se revisará si procede la condena por intereses moratorios.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la Sentencia de Primera instancia; por las siguientes razones:

Está acreditado en el expediente que **la demandante señora Helda María Murillo Rincón nació el día 2 de julio de 1956** (archivo 03) y **cumplió 57 años de edad el mismo día y mes del año 2013;** según certificado de información laboral expedido el 6 de mayo de 2014 por la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl, la demandante prestó servicios entre el 8 de junio de 1993 y el 1º de marzo de 2004 (archivo 03).

Para imponer condena a la AFP demandada, **el Juzgado de Primera Instancia consideró** en términos generales, que Porvenir S.A. debió adelantar las gestiones necesarias para conformar la historia laboral y verificar la prestación del servicio de la demandante con la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl, sin que exista prueba de haber agotado dichos trámites; en cambio, con la petición radicada ante Porvenir S.A. el 20 de noviembre de 2017, la demandante incluyó certificado de mayo de 2014 con constancia de los servicios prestados a la entidad pública, para la fecha de la petición superaba las 1.150 semanas cotizadas pues contaba con 1.325 y había cumplido los 57 años de edad desde el año 2013, adjuntó los insumos que permitían resolver sobre el derecho pensional y la AFP pudo requerirla en caso que los encontrara deficitarios; además conocía que el capital era insuficiente para financiar su pensión de vejez, cálculo que pudo realizar con el valor del Bono pensional y preliquidación obtenida de la Oficina de Bonos Pensionales; concluyó que Porvenir S.A. fue negligente y omitió el cumplimiento de sus deberes, en lo referente a la conformación de la historia laboral de la demandante, para verificar los tiempos de servicio prestados y reconocer la pensión de vejez, teniendo cumplidos los requisitos legales, pues ni siquiera la requirió para que subsanara falencias en caso de existir alguna.

Sobre lo que es objeto de apelación, tenemos que:

Acerca de la **garantía de pensión mínima de vejez**, el **artículo 65 de la Ley 100 de 1993** dispone que los afiliados que a los cincuenta y siete (57) años de edad si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el

artículo 35 *ibídem* y hubiesen cotizado por lo menos 1.150 semanas, tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.

Sobre este tema, el **artículo 68 de la Ley 100 de 1993**, contempla que las pensiones de vejez se financiarán con los recursos de las cuentas de ahorro pensional, con el valor de los Bonos Pensionales cuando a ello hubiere lugar y con el aporte de la Nación, en los casos en que se cumplan los requisitos correspondientes para la garantía de pensión mínima de vejez.

Por su parte, el **artículo 19 del Decreto 656 de 1994** “*Por el cual se establece el régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos de pensiones*”, define que el Gobierno Nacional establecerá los **plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez**, invalidez y sobrevivencia, **sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses**.

En el **artículo 20 *ibídem***, se indica que **corresponde a las Administradoras de Fondos de Pensiones adelantar, por cuenta del afiliado** pero sin ningún costo para éste, **las acciones y procesos de solicitud de emisión de Bonos Pensionales y de su pago, cuando se cumplan los requisitos establecidos para su exigibilidad**; consagra que “*...Las solicitudes de emisión de bonos pensionales deberán ser presentadas a la entidad previsional correspondiente dentro de los seis (6) meses inmediatamente siguientes a la vinculación del afiliado que tenga derecho a dicho beneficio, y hasta tanto sean emitidos efectivamente deberán efectuar un seguimiento trimestral al trámite de su emisión...*” (Negritas fuera de texto); la solicitud de pago del Bono para atender una pensión mínima “*...deberá ser presentada*

dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la decisión de la administradora acerca del cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos para acceder a la pensión...” y en todo caso, el seguimiento del proceso de pago efectivo de los Bonos Pensionales se adelantará por las entidades que tengan a su cargo el pago de la respectiva pensión.

Así mismo, en el **artículo 21**, contempla que **las administradoras que incumplan el plazo establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensión deberán pagar, con cargo a la respectiva cuenta individual de ahorro, una pensión provisional en favor del afiliado**, calculada tomando en consideración los mismos criterios establecidos para la determinación de la mesada pensional a través de retiros programados. Esta pensión comenzará a reconocerse mensualmente a partir del día quince (15) hábil contado desde el vencimiento del plazo señalado para pronunciarse y deberá pagarse hasta el momento en el cual se efectúe el correspondiente pronunciamiento. Agrega que, **cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una pensión por falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de Bonos Pensionales**, de las solicitudes de pago de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes de pago de las diferencias a cargo de las compañías aseguradoras, **por razones imputables a las administradoras, éstas deberán reconocer a los respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus propios recursos;** concluyendo que en general, “...corresponderá a las administradoras asumir pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos en todos aquellos casos en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora...” (Negritas fuera de texto).

Adicionalmente, las AFP deben contar con los mecanismos que les permitan determinar en forma permanente la mora o incumplimiento por parte de los empleadores en el pago oportuno de las cotizaciones, de tal forma que puedan adelantar oportunamente las acciones de cobro de las sumas pertinentes (artículo 23 ibídem).

En concordancia con lo anterior, el **artículo 4° del Decreto 832 de 1996**, indica que corresponde a la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el reconocimiento de la **garantía de pensión mínima** “...acto que se expedirá con base en la información que suministre la AFP o la aseguradora, **entidades a las cuales**, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 100 de 1993, **les corresponde adelantar los trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima...**” (Negritas fuera de texto).

En un asunto de contexto similar al presente, donde la AFP alegó que el procedimiento ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendiente al reconocimiento de la garantía de pensión mínima, requería en forma previa tener consolidada la historia laboral, incluyendo el Bono Pensional a que hubiere lugar, **la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL1020 del 16 de marzo de 2022** reiterando SL196-2019, **indicó que corresponde a la AFP mantener actualizada la información en forma permanente y detallada**, debiendo **detectar cualquier inconsistencia en forma oportuna**, de tal manera que **se reconozca la prestación económica sin retraso alguno**; refiriendo a que **la exigencia de solicitar la emisión del Bono Pensional, en los seis (6) meses siguientes a la vinculación del afiliado, obliga a una revisión**

casi inmediata de la historia laboral, lo que permite evitar tropiezos al momento del reconocimiento pensional; en ese caso, la demandante se afilió a la AFP el 30 de mayo del año 2000, explicando que según lo reglado en el artículo 20 del Decreto 656 de 1994, las gestiones para emisión del Bono Pensional debían iniciarse a más tardar el 30 de noviembre de ese año, tardando la entidad casi 14 años para ello, por lo que no era admisible responsabilidad a cargo del Ministerio de Hacienda por el retardo en el trámite; por su pertinencia se transcriben en extenso los siguientes apartes:

“...Todas estas normas tienen un trasfondo, que es relevante para el caso, que consiste en que **la AFP debe tener la información actualizada de los afiliados, a tal nivel de detalle que en cada momento que sea señalado por la ley o los reglamentos pueda desplegar las actividades necesarias que, al final, conduzcan a que se obtenga la prestación económica correspondiente sin ningún retraso o tropiezo**, o que habiéndolos, sean identificables, para que con la antelación debida puedan tomarse las medidas que corresponda para la finalidad que se ha mencionado, esto es, el reconocimiento y pago del beneficio correspondiente.

Así, nótese que **si se adelanta el procedimiento de solicitud de emisión del Bono Pensional en la oportunidad que señala el artículo 20 del Decreto Ley 656 de 1994, necesariamente ello conlleva la revisión de la historia laboral, lo que permite detectar cualquier inconsistencia que exista hasta ese momento y proceder a su corrección**, siguiendo los mecanismos dispuestos para ello.

La inmediatez que se exige en la actuación, esto es, seis (6) meses siguientes a la vinculación del afiliado, muestra su bondad, precisamente, en el hecho de que obliga a una revisión casi inmediata de la historia laboral, lo que significa que los datos, información y documentos son más próximos y, por ende, ubicables, lo que hace que su verificación, comparación y corrección resulten más llevaderos, con lo cual se busca garantizar, acertadamente, evitar afugias al final del ciclo laboral para quien está próximo a pensionarse.

El Tribunal encontró probado, con el formulario respectivo (f.º 186), que María Victoria Botero Londoño se vinculó a Porvenir el 30 de mayo del año 2000, hecho que no es objeto de discusión en casación, por tanto, según lo reglado en el artículo 20 del Decreto 656 de 1994, las gestiones para emisión del Bono Pensional debían iniciarse a más tardar el 30 de noviembre de 2000, no obstante lo cual, esa actividad se vino a desarrollar casi 14 años después, con la consecuencia de que la afiliada no pudiera disfrutar de la prestación cuando cumplió los requisitos para ello.

De esa suerte, responsabilizar a Colpensiones, a los ex empleadores, al Municipio de Santa Rosa de Cabal o al Ministerio de Hacienda por el retardo en el trámite, como lo pretende la recurrente, no tiene asidero alguno, pues el

elenco normativo que regula la materia la obligaba como AFP a actuar con suma diligencia, honrando la profesionalidad que debe caracterizar a quien se dedica a una actividad financiera de la seguridad social, que además es objeto de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera.

No era hasta al momento del cumplimiento de los requisitos para acceder a la garantía de la pensión mínima cuando debía verificarse la consistencia, integridad y veracidad de la historia laboral de la afiliada; ni era esa la oportunidad para iniciar las gestiones de solicitud de emisión del Bono Pensional a que ella tenía derecho, lo cual, tal como lo señaló el Tribunal, configuró una negligencia de la AFP Porvenir...”
(Negritas fuera de texto).

Así mismo, **en Sentencia SL1534 de 2019 Radicado 68463**, llamó la atención a las AFP para que se abstengan de imponer trabas innecesarias a los afiliados en el proceso de reconocimiento de la pensión de vejez, señalando que **cumplida la edad mínima y las 1.150 semanas exigidas, sin que se cuente con el capital necesario para financiar la pensión mínima de vejez** en los términos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, **los afiliados deben ser pensionados provisionalmente con cargo a los dineros que posean en su cuenta de ahorro individual**, siendo un imperativo legal, que tales administradoras deben realizar las gestiones pertinentes para lograr la garantía de la pensión mínima contemplada por el aludido artículo 65 de la Ley 100 de 1993; veamos:

*“...El análisis sistemático que se realiza en precedencia, permite a la Sala hacer un llamado de atención a las AFP, a fin de que no coloquen trabas innecesarias en el reconocimiento de las pensiones de vejez de sus afiliados, pues **si ellos arriban a los 57 años si son mujeres, o 62 si son hombres y cuentan con más de 1.150 semanas cotizadas o de tiempo de servicios, pero no reúnen el capital mínimo necesario para el financiamiento de su pensión mínima de vejez en los términos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, deben ser pensionados provisionalmente con cargo a los dineros que posean en su cuenta de ahorro individual**, luego de lo cual, se constituye en un imperativo legal, que tales administradoras deben realizar las gestiones pertinentes para lograr la garantía de la pensión mínima contemplada por el aludido artículo 65 ibídem; ya que, se itera, si la administradora no cumple diligentemente tal obligación legal, como ya se explicó, debe asumir el pago de la pensión mínima de vejez con cargo a sus propios recursos, como lo señalan las normas trascritas en precedencia...”*
(Negritas fuera de texto).

En el asunto bajo estudio, encuentra esta Sala de Decisión Laboral que no le asiste razón al apoderado de PORVENIR S.A., cuando afirma que la demandante solo presentó un derecho de petición enviando algunos documentos, incumpliendo obligaciones inherentes como afiliada, *pues se debía establecer la historia laboral, solicitarse las certificaciones de tiempos de servicio con el salario base, tenía que verificar la información y solicitar las modificaciones en caso de encontrar inconsistencias, una vez se establece que la historia laboral está correcta se procede a solicitar la emisión de Bono pensional, lo que no se dio porque la demandante en ningún momento reclamó y no firmó la historia laboral.*

Al respecto, debe indicarse que la Administradora de Fondos de Pensiones no puede válidamente, pretender trasladarle a la afiliada la responsabilidad de adelantar todas las gestiones necesarias para conformar la historia laboral y obtener el pago del Bono pensional a que haya lugar; observándose que en el derecho de petición fechado el **18 de noviembre de 2017**, la demandante expresamente manifestó: “...**se solicita el reconocimiento de GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ**, de manera retroactiva a la fecha en que realicé mi último aporte para pensiones junio de 2017, con las mesadas adicionales de junio y diciembre, intereses moratorios, indexación de sumas...” (fls 27 y 28 archivo 03); documento que fue remitido a PORVENIR S.A. a través de la empresa postal Servientrega S.A. con la guía No 965066215 y con ese número aparecen cotejados los documentos que anexó como: fotocopias de cédula de la afiliada y el esposo, registro civil de nacimiento de la afiliada, registro civil de matrimonio, fotocopia de cédula de ciudadanía de hijos, certificado de información laboral y de salarios mes a mes expedido por la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de San Carlos (ver archivo 03); correspondencia que aparece con sello de

recibido en Porvenir S.A. el día 20 de noviembre de 2017 (archivo 03), hecho aceptado por el apoderado de la demandada, al reconocer que *la demandante presentó un derecho de petición*.

De acuerdo a lo anterior, existiendo prueba de la solicitud del reconocimiento del derecho pensional, acompañada de la documentación pertinente, correspondía a la AFP adelantar las gestiones necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos legales, con miras a determinar si era viable o no acceder a lo pedido, de lo cual no hay prueba; tal como explicó el Juez de Primera Instancia.

En lo referente a que la demandante no cumple la densidad de 1.150 semanas cotizadas, ya que aparece con 1.092 semanas confirmadas y 41 por confirmar, lo que **daría un total de 1.133.5 semanas**, insuficientes para el reconocimiento pensional; tampoco le asiste razón al apoderado de PORVENIR S.A., toda vez que:

Según la historia laboral más actualizada, generada por PORVENIR S.A. el día 6 de enero de 2021, es cierto que la demandante aparece con 1.092 semanas cotizadas y 41.5 por confirmar; sin embargo, la AFP desconoce una cantidad de semanas al registrar en forma incompleta diferentes periodos, como se detalla a continuación:

Empleador	Periodo	Días reportados	Días faltantes
Hospital San Vicente de Paúl - San Carlos	sep-96	7	23
	oct-96	11	19
	nov-96	8	22
	dic-96	10	20
	may-97	29	1
	jun-97	29	1
	ene-98	29	1
	jul-97	29	1
	dic-98	23	7
	ene-99	29	1
	jun-99	29	1
	abr-00	23	1
	jul-00	29	1
	sep-00	29	1
	dic-00	29	1
	may-01	29	1
	ago-01	28	2
	dic-01	29	1
	may-22	23	7
	jun-22	22	8
	jul-02	19	11
	ago-22	23	7
	nov-02	9	21
	dic-02	13	17
	feb-03	29	1
	mar-03	29	1
	may-03	28	2
	sep-03	29	1
Inversiones El Conro S.A.S.	jul-14	23	7
Total días			188
Equivalente en semanas			26,85
Semanas reconocidas en historia laboral			1092
Semanas pendientes por confirmar			41,5
Total semanas			1160,35

De esta manera, **para el 20 de noviembre de 2017, cuando la demandante reclamó el reconocimiento de la garantía de pensión mínima, contaba con 1.160 semanas cotizadas**, incluyendo 1.092 reconocidas por PORVENIR S.A. en

la historia laboral, 41.5 que aparecen en estado *pendientes por confirmar* y 26.85 semanas desconocidas en forma injustificada, ya que la AFP registró en forma incompleta diferentes periodos en su gran mayoría certificados como tiempo de servicio completo con la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl del Municipio de San Carlos – Antioquia. Estando acreditado que desde el 2 de julio del año 2013 la señora Helda María había alcanzado la edad de 57 años y por tanto, cumplía los requisitos exigidos en la normatividad aplicable para acceder a la garantía de pensión mínima de vejez; tal como explicó el Juez de Primera Instancia.

Lo que se evidencia con la prueba obrante en el expediente, es que **PORVENIR S.A. no cumplió con su deber legal de pensionar a la demandante en forma provisional, con cargo a los dineros que tenía en su cuenta de ahorro individual, habiéndose constatado el cumplimiento de requisitos, tales como edad de 57 años y número de semanas en más de 1.150.**

No siendo admisible que la AFP pretenda dejar en un estado de indefinición el reconocimiento del derecho pensional, pues a la fecha no se conoce pronunciamiento alguno frente a la petición elevada el 20 de noviembre de 2017, ni puede postergar la garantía del derecho a la seguridad social, hasta el día en que la entidad pública emita y pague lo que corresponda por concepto de Bono pensional, aduciendo que la demandante incumplió sus obligaciones como afiliada, debiéndose reiterar que **es la Administradora de Fondos de Pensiones la que tiene la obligación de realizar las gestiones necesarias, incluyendo la pensionar a la demandante en forma provisional, con cargo a los dineros que tenía en su cuenta de ahorro individual.**

Téngase en cuenta que, según extracto del Fondo de Pensiones Obligatorias de PORVENIR S.A., **la demandante registra con afiliación desde diciembre de 1996** (fl 8 archivo 34) y para el 20 de noviembre de 2017, cuando la demandante reclamó la pensión de vejez, **habían transcurrido más de veinte (20) años, tiempo que la AFP tardó en adelantar el trámite necesario para conformar la historia laboral**, pese a que el inciso 2° del artículo 20 del Decreto 656 del 25 de marzo de 1994, señala que **tal reclamación deberá ser presentada** a la entidad previsional correspondiente **dentro de los seis (6) meses inmediatamente siguientes a la vinculación del afiliado; siendo clara la falta de diligencia y omisión en el cumplimiento de los deberes a cargo de la AFP**, puesto que de haber actuado dentro de tal oportunidad, habría conocido en forma previa la liquidación provisional del Bono.

Siendo deber de la administradora, obtener y mantener actualizada toda la información previsional de los afiliados, de tal forma que estén en capacidad de determinar con precisión el momento en el cual cada uno de ellos cumple los requisitos para acceder a una pensión por vejez (art. 17 Dcto 656 de 1994); así mismo, debe “...avisar a sus afiliados, con una antelación no inferior a tres (3) meses, el momento en el cual se cumplirán los requisitos para acceder a la garantía estatal de pensión mínima, mencionando las modalidades de pensión establecidas por la ley, junto con una descripción suficiente de cada una de ella...” (art. 18 ibídem).

Así las cosas, **esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia, en cuanto condenó a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., a reconocer y pagar la garantía de pensión mínima de vejez. Así mismo, en cuanto ordenó su reconocimiento a partir del 2 de agosto de 2017, fecha que corresponde al día siguiente a la última cotización efectuada por la demandante al Sistema General de Pensiones** (historia laboral actualizada el 6 de enero de 2021) y ya acreditaba los requisitos de edad y número mínimo de semanas exigidos en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993; habiendo reclamado la pensión de vejez desde el día 20 de noviembre de 2017.

Sobre los intereses moratorios:

Los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 la Ley 100 de 1993, se causan por la tardanza injustificada en el pago de mesadas pensionales. Así mismo, **el artículo 33 de la Ley 100 de 1993**, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, establece que **los fondos encargados reconocerán la pensión, en un tiempo no superior a cuatro (4) meses**, después de radicada la solicitud, con la documentación que acredita el derecho. A su vez, el **Decreto 656 de 1994 en su artículo 19**, contempla que el Gobierno Nacional, establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, **sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses.**

Sobre el momento a partir del cual se deben intereses moratorios, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en Sentencias SL1681 de 2020, SL5170 de 2019, SL13670 de 2016, entre otras, precisó que **se causan** desde cuando hay pago tardío de la obligación pensional, esto es, **luego de que transcurren los cuatro meses que tiene el Fondo de pensiones para reconocer y pagar la prestación,** siempre y cuando haya lugar a ello. Siendo procedente su pago a cargo de PORVENIR S.A. y a favor de la demandante, por el no reconocimiento y satisfacción oportuna de la pensión de vejez, estando demostrado el incumplimiento de los deberes y omisión de la administradora de pensiones, para la gestión oportuna de los trámites administrativos necesarios para mantener consolidada la historia laboral y la solicitud de emisión del Bono Pensional; los cuales en términos de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia “...*procedente aun cuando la entidad hubiera tenido el convencimiento que no era dable el reconocimiento de la prestación deprecada, toda vez que su naturaleza es resarcitoria y no sancionatoria...*” (SL1020-2022).

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **confirmar** en todas sus partes la Sentencia de Primera Instancia.

COSTAS:

Se condenará en Costas en esta Segunda Instancia a cargo de PORVENIR S.A., al no haber prosperado el recurso de Apelación formulado, fijándose las agencias en derecho en cuantía

equivalente **un (1) salario mínimo legal mensual vigente (\$1.000.000)** en favor de la demandante; de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** en todas sus partes la Sentencia de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de Apelación se revisa, incluyendo lo referente a la condena en Costas; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

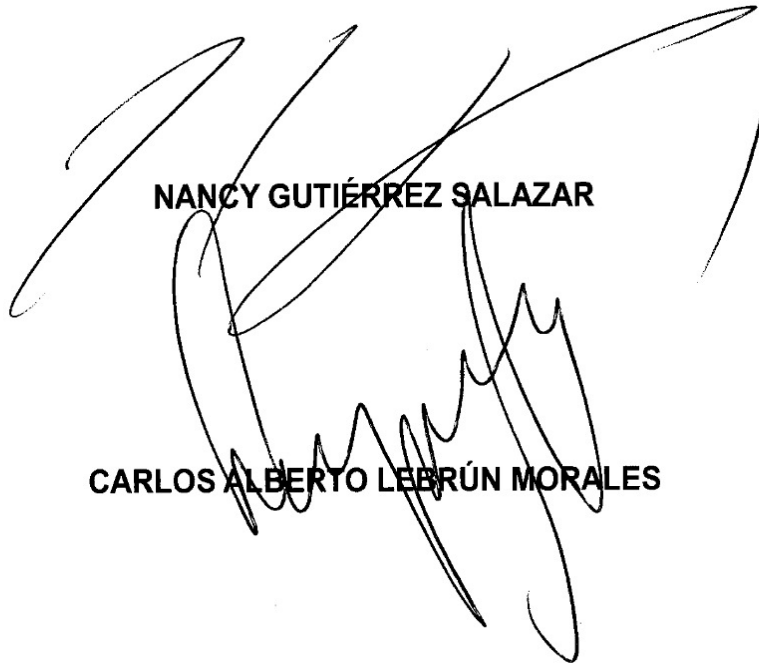
SEGUNDO: Se **CONDENA en Costas** en esta Segunda Instancia a cargo de **PORVENIR S.A.**, fijándose las agencias en derecho en cuantía equivalente a **un (1) salario mínimo legal mensual vigente (\$1.000.000)** en favor de la demandante **HELDA MARÍA MURILLO RINCÓN**; según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: HELDA MARÍA MURILLO RINCÓN
Demandados	: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
Litisconsorte Necesario por Pasiva	: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS
Radicado	: 050013105 022 2018 00148 01
Providencia	: Sentencia
Temas	: Seguridad Social – garantía de pensión mínima de vejez, intereses moratorios -
Decisión	: Confirma Sentencia condenatoria
Sentencia No	: 292

FECHA SENTENCIA: 5 de diciembre de 2022

CONSTANCIA DE FIJACIÓN **CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Fijado hoy martes 6 de diciembre de 2022 a las 8:00 Am Desfijado hoy martes 6 de diciembre de 2022 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ
Secretario

Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral

Demandante: Helda María Murillo Rincón

Litisconsorte Necesario por Pasiva: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, E.S.E. Hospital San Vicente de

Paúl del Municipio de San Carlos – Antioquia.

Radicado: 05001 31 05 022 2018 00148 01

Demandado: PORVENIR S.A.